

desde el 12 de enero de 1988, debiendo de practicar la Administración la liquidación correspondiente; sin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la Secretaria general técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Ilmos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

10133 *ORDEN de 16 de marzo de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.332/1991, interpuesto contra este Departamento por don Jacinto López Hazas Martín.*

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 30 de septiembre de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) en el recurso contencioso-administrativo número 2.332/1991, promovido por don Jacinto López Hazas Martín, contra resolución expresa de este Ministerio por la que se confirma en alzada la sanción de multa impuesta al recurrente en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Anibal Bordallo Huidobo, actuando en nombre y representación de don Jacinto López Hazas Martín, contra la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 28 de marzo de 1990 en cuanto desestimatoria del recurso de reposición entablado frente a la Resolución de 6 de noviembre de 1989 que confirmó en vía de alzada, el acuerdo del Secretario general para el Consumo de 12 de diciembre de 1983 por el que se imponía al hoy recurrente la sanción de 100.000 pesetas de multa en aplicación del artículo 3.º, apartado 18, y artículo 5.º del Decreto 3052/1966, de 17 de noviembre, sobre Disciplina de Mercado, debemos declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas no son conformes a Derecho por haber prescrito la sanción impuesta. Sin costas.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la Secretaria general técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Ilmos. Sres. Subsecretaria de Sanidad y Consumo y Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

10134 *ORDEN de 16 de marzo de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.926/1987, interpuesto contra este Departamento por don Servando Rivero Arellano.*

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 10 de marzo de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso contencioso-administrativo número 2.926/1987, promovido por don Servando Rivero Arellano, contra resolución expresa de este Ministerio por la que desestima en alzada el recurso formulado sobre valoración de méritos otorgada al recurrente por el Tribunal del concurso-oposición para la provisión de una plaza de Médico especialista en Radiodiagnóstico en los Servicios jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en Melilla, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Servando Rivero Arellano contra la resolución de fecha 25 de febrero de 1988 del Ministerio de Sanidad y Consumo que desestimó el recurso de alzada formulado contra la valoración de méritos otorgada al recurrente por el Tribunal del concurso-oposición para la provisión de una plaza de Médico especialista en Radiodiagnóstico en los Servicios jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en

Melilla, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho las citadas resoluciones; sin hacer imposición de costas.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la Secretaria general técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Ilmos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

10135 *ORDEN de 16 de marzo de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo número 4.230/1991, interpuesto contra este Departamento por doña Mercedes López Herrera.*

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 18 de septiembre de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) en el recurso contencioso-administrativo número 4.230/1991, promovido por doña Mercedes López Herrera, contra resolución de este Ministerio por la que se deniega tácitamente la petición formulada por la recurrente sobre reconocimiento del coeficiente 3,3 e índice de proporcionalidad 8, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por doña Mercedes López Herrera contra la denegación por silencio administrativo de su solicitud de 28 de febrero de 1991, debemos declarar y declaramos no ajustado a Derecho el referido acto presunto, y, en consecuencia, lo anulamos y declaramos que la actora tiene derecho a ello y así se le reconoce el coeficiente 3,3 y el nivel de proporcionalidad 8, con efectos desde el 23 de febrero de 1986. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la Secretaria general técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Ilmos. Sres. Subsecretaria de Sanidad y Consumo y Director general de Servicios e Informática.

10136 *ORDEN de 16 de marzo de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 4/48.210, interpuesto contra este Departamento por «Hermanos Dávila, Sociedad Anónima».*

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 7 de octubre de 1992 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 4/48.210, promovido por «Hermanos Dávila, Sociedad Anónima», contra resolución expresa de este Ministerio por la que se confirma en alzada y reposición la sanción de multa impuesta a la recurrente en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Pérez de Sevilla, en nombre y representación de «Hermanos Dávila, Sociedad Anónima», contra las resoluciones a que se contraen las presentes actuaciones, debemos anularlas por no ser conformes a Derecho, con todas las consecuencias inherentes a esta declaración. Sin hacer una expresa imposición de costas.»

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la Secretaria general técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Ilmos. Sres. Subsecretaria de Sanidad y Consumo y Presidente del Instituto Nacional del Consumo.